

Proyecto PISAC-COVID-19-00040

Concurso

*El sostén público a la supervivencia de hogares
y unidades económicas en la urgencia.
Iniciativas, mediaciones y alcances de la
asistencia en perspectiva comparada*



Detrás de nuestro trabajo hay historias. Desde marzo de 2021 el proyecto ***PISAC COVID 19 El sostén público a la supervivencia de hogares y unidades económicas en la urgencia*** intentó medir el impacto económico de la pandemia en 8 conglomerados urbanos del país. Más allá de los números y las estadísticas, nos encontramos con experiencias. Personas que buscaron caminos para reconfigurar su subsistencia en un contexto de emergencia. En ese marco, organizamos un concurso de crónicas e invitamos a lxs investigadorxs de campo a contarnos las historias de vida con las que se encontraron en el territorio.

Esta es la voz de lxs ganadorxs.

ÍNDICE

[Nodo AMBA](#)

[Nodo Comodoro Rivadavia](#)

[Nodo Córdoba](#)

[Nodo La Pampa](#)

[Nodo Mendoza](#)

[Nodo Santa Fe](#)

[Nodo Tucumán](#)

NODO AMBA

LA GOTA ARTESANAL QUE REBASÓ LA CERVEZA

Por Álvaro Espejo

Los grandes barriles metálicos era lo que más se visualizaba, completado con el ruido de la trituradora de lúpulo. Como parte del cuidadoso proceso de elaboración: las manos debían estar firmes mientras la cerveza se revolvía en ollas. Mientras eso pasa, Pocho me cuenta que su empresa “BAFIR” se había fundado en 2012, que eran 4 amigos decididos a empezar a producir su propio material. “Pasamos del bloque de 50 litros a un bloque de 500 litros”, me comenta orgullosamente, sobre todo porque “los dueños somos nosotros, cada vez que hay plata se pone acá dentro. Se invierte todo en la fábrica”, comenta.

La cerveza artesanal se popularizó en todo el mundo en el último tiempo, por lo que también se ampliaron los productores del sector. Sin embargo, sólo representa el 3% del total de la bebida en el país. El 97% restante está en manos de cervecías industriales y concentrada por una fábrica diversificada: Ab Inbev, dueña de las marcas Quilmes y Brahma. La cerveza de Pocho tiene un mejor cuidado, y una mayor calidad, pero menos llegada al público: Birra grande se chupa a birra chica, aclara

Al no tener respaldo financiero, la empresa se vio fuertemente afectada por el cese de actividades derivado de la pandemia en el año 2020. Pocho se enteró por sus colegas cerveceros de la implementación del ATP, Necesitaban ese ingreso para poder sobrevivir a la crisis, pero la contadora le comentó que la empresa no aparecía catalogada como “esencial” en la AFIP.

Parecía no haber muchas salidas, hasta que la Cámara de Cerveceros Artesanales comenzó a reunirse, a organizarse para hacer trabajo de “lobby” y gestionar que el sector fuera incluido como una actividad en crisis. Recién a partir del segundo mes se nos asignó el ATP”, recuerda Pocho. Al fin, luego de varios sobresaltos, se hizo posible conseguir esa ayuda, lograda por la organización del trabajo colectivo y la buena representación de la Cámara. “Estamos obligados a tener una relación y buena camaradería entre nosotros, porque si nos empezamos a sacar chispas, los otros se hacen una fiesta”, comenta Pocho.

Para “BAFIR”, el monto correspondiente al ATP significó un 30% del volumen total vendido y permitió seguir pagando la totalidad de los sueldos. “Se me pone la piel de gallina, de verdad, porque si no hubiese tenido el ATP, no sé qué hubiese pasado. Es una increíble política pública. Sin eso, no hubiéramos sobrevivido”, dice Pocho con los ojos brillosos.

La producción de cerveza artesanal requiere otros cuidados y otras atenciones: “Acá tenemos un producto que está vivo, porque la cerveza tiene levadura, microorganismos”. Pocho, que es ingeniero industrial, siente que su profesión es como un mar de conocimiento, pero con un metro de profundidad. Pero qué importa cuántos peces viven en ese mar si la profundidad es la más clara y artesanal de todas.

NODO COMODORO RIVADAVIA

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA. DE CÓMO LAS ATP ALIVIAN Y TE COMPLICAN A LA VEZ

Por Soledad Rolón y Susana Vidoz

Desde la década del 70, la empresa familiar De Buena Cepa SRL, participa en la actividad petrolera haciendo transporte de equipos, de cargas y montajes industriales y grúas. Atravesó los vaivenes que el valor del commodity tiene históricamente acostumbradas, en general a las empresas de la Cuenca del Golfo San Jorge y a la ciudad, en particular.

El comienzo de la pandemia tomó por sorpresa a la compañía, que había aprobado los contratos de tres profesionales para un trabajo específico en el campo. A los cuatro días de iniciadas las tareas, debieron regresar a sus hogares. Pese a eso -contratación (y nobleza) obliga- percibieron sus honorarios completos durante el lapso comprometido.

La noticia de la ATP fue, en principio auspiciosa para los dueños de la empresa, quienes no dudaron en aprobar la propuesta de inscribirse que les planteó el gerente de Recursos Humanos. Así se podrían cubrir los salarios sin generar un cuello de botella en las finanzas. Esto resultaba clave teniendo en cuenta la inversión en ciernes desde 2019: una grúa alemana con tecnología avanzada que reposicionaría a De Buena Cepa en el izaje, operación que permite el levantamiento y suspensión de cargas de gran volumen y peso.

Concretada la inscripción, lo que siguió fue una odisea de desventuras. Acá empieza el lado B, la otra cara de la moneda. La incertidumbre por la suerte del trámite realizado, el tiempo de acreditación de los sueldos a las cuentas de los beneficiarios y la desconfianza que generó la información cruzada, propagó una implacable sensación de desazón y cansancio. Desazón porque muchos de los trabajadores, con quienes hasta hace poco los representantes de la empresa habían compartido algún mate, se mostraban enojados ante la posibilidad de no cobrar sus salarios completos. ¿Acaso no iban a trabajar porque no los dejaban y a pesar suyo? Cansancio porque al encender el teléfono celular por la mañana temprano entraban como agua de una cascada decenas de mensajes preguntando con ansiedad y preocupación: “¿Qué pasó? ¿Cuándo me pagan lo que falta?”

Por aquellos días, el trabajo administrativo se intensificó. Además del home office, revisar varias veces las liquidaciones de sueldos, hubo que seguir minuciosamente los cambios de las disposiciones para resolver a contrarreloj las liquidaciones de haberes y quedar expectante de la acreditación de la ATP. Cuando no se acreditaba a tiempo había que hacer un esfuerzo para pagar los salarios completos. La acreditación tardía generó malentendidos. Varios trabajadores creyeron haber recibido aumentos o premios, tal como suele reclamar el sindicato.

Otro capítulo del lado B de las ATP fue la imposibilidad de comprar dólares. En ese caso, la moneda extranjera no perseguía fines especulativos, sino de inversión: la anhelada máquina de izaje.

En todo caso fue difícil imaginar la manera en que todos debieron adaptarse a la situación pandémica. Mientras la mayoría guardaba cuarentena en sus casas, unos pocos lidiaron con la avalancha de tareas que implicó el pasaje abrupto a la virtualidad.

Extensas e intensas jornadas de trabajo, en palabras del Sr Punte: “Nunca trabajé tanto como en esta pandemia. Hubo que atender demandas de unos y otros, empleados, patronos y sindicatos... las veces que habré salido volando en chancletas”.

NODO CÓRDOBA

“LO QUE LUCÍA NO ENTIENDE”

Por Victoria Lucía Daghero

Lucía tiene 25 años, estudia en la Universidad Nacional de Córdoba y trabaja en la empresa FLORES. Vive sola con su gato en un departamento del centro. Por su trabajo, pasa cuatro horas diarias en la vía pública sumando personas para que donen mensualmente dinero a ONG. Siempre llega a los objetivos de afiliaciones, y más compañerxs se suman mes a mes.

Lucía sabe que existe un virus que amenaza muchos países, y sabe que cerraron los bares y se restringieron las reuniones. En la universidad ya no atienden las oficinas, todo es por mail. Y sus jefes también lo saben.

Es 18 de marzo, a todxs lxs trabajadores de FLORES que tenían menos de tres meses en la empresa se les notificó que ya no debían concurrir al día siguiente, estaban despedidxs. Lucía sabe que no se les pagará la indemnización.

Es 19 de marzo del 2020, Lucía trabajó por la mañana y por Cadena Nacional se entera que al día siguiente comienza la “cuarentena” y ya no puede trabajar en vía pública. En los siguientes días, la empresa le da un celular y un chip: ahora tiene que sumar gente por teléfono. Ese mes cobra normalmente su salario.

Pasan más de 30 días cuando le notifican por mail que está suspendida, que va a recibir un 35% menos de su salario. Cobra los primeros días de mayo, y a mitad de mes ve depositado el monto de su salario. Pero sin el descuento. Rugen los grupos de WhatsApp. Parece que es ese tal ATP. “Sí”, dice la empresa, “es el ATP”.

Es hora de cobrar junio, y los recibos dicen cosas raras. “Cero pesos uno, veinte pesos otro” “¿Por qué no cobro nada?” “Acordate que nos debes lo del mes pasado, porque cobraste dos veces”. “Y fijate que vos tenés que cobrar el 35% menos, y se te depositó sin descuento. Esa diferencia la tenés que devolver también”. Cobra dos rondas más del ATP con su salario completo.

Lucía está suspendida y no entiende. Ningunx de sus compañerxs entiende. Los meses pasan y la deuda con la empresa, aumenta. Lucía sabe que cuando deje de recibir el subsidio deberá saldar la deuda con FLORES.

Lucía piensa que lo que está haciendo la empresa no es legal. Con otras compañeras busca ayuda en el sindicato. Pero ¿de cuál? “Les corresponde el sindicato de publicistas”, dice la empresa. “No les corresponde este sindicato”, dicen los publicistas. Lo mismo dicen los de comercio. Lucía y sus compañerxs están confundidos, ningún sindicato quiere hacerse cargo, y resuelven contratar a un abogado. Por su sugerencia, terminan arreglando la renuncia.

Lucía no entiende: si la plata se la da el Estado ¿por qué ella la tiene que devolver? “Es como un robo”, siente. “En última instancia, ellos deberían aclararle al Gobierno que nos están pasando plata de más. Ellos sabían que si el Gobierno nos pagaba 3.000 pesos de más, lo íbamos a gastar para comprar comida. Era lógico, no íbamos a ponerlo en una caja de ahorro para devolverle esa plata a FLORES.”

Siente, además, que es injusto que la empresa se adjudique como ganancia el dinero que el Gobierno dispuso para el pago de salarios. Su salario, que es también su derecho.

LÍMITES

Por Valentina Damiano

Rosario tiene 38 años, once hijos, cuatro nietos y una larga lista de parejas fracasadas, violentas y abusivas. Ahora, pareciera vivir un presente tranquilo junto a Diego. Con él se dedican a recoger cartones y trabajan en alguna que otra changa, además de cuidar a los pibes, mandarlos a la escuela y mantener la casa. Rosario nació y vivió siempre en asentamientos. Las circunstancias a las que la expuso la vida en la villa no le permitieron escolarizarse: apenas sabe escribir su nombre y fecha de nacimiento.

Cuando empezó la pandemia, ella y su pareja juntaban el mango con un carrito en el que recolectaban cosas de la calle. Se acababan de mudar a otro barrio, con la ilusión de establecerse para estar más tranquilos, pero el ASPO significó para ellos la merma de cualquier ingreso por afuera de la asistencia estatal. En esas circunstancias, decidieron volver a la villa porque, a pesar de todo, es un espacio de contención donde se tienden lazos que les permitirían sobrevivir un poco más fácilmente.

Rosario recibe una pensión por ser madre de siete (o más) hijos, que equivale a una jubilación mínima. Como se emite desde la ANSeS, no pudo acceder al IFE. Entre todos los integrantes de su amplia descendencia, reciben además, otras ayudas estatales como la tarjeta social, la Tarjeta Alimentar y el gas solidario. Con lo que van juntando entre changas y planes, tienden redes para ayudarse, compartir lo que tienen e ir gestionando sus necesidades. Mientras entrevistaba a Rosario pude ver cómo sus hijos más grandes y otros habitantes de la villa entraban y salían pidiendo elementos que se comparten. En los asentamientos los límites de las casas son difusos, las puertas (si las hay) están abiertas, los espacios se entrecruzan, el patio es la calle, la calle es la casa.

Fue Diego el que pudo cobrar el IFE. Con esa plata, hicieron una mesada de material y compraron algo de ropa. Además, suelen sacar créditos. La plata nunca les alcanza y con eso visten a los pibes, compran útiles escolares y comida. Para Rosario, la ayuda del Estado es indispensable. El Estado, sus gobiernos, le han negado sistemáticamente otras formas de amparo. Desde que nació vive la violencia de ser pobre, de no poder estudiar para forjarse un futuro diferente, de tener que “vivir como gitanos” porque a “los negros de mierda” se los condena a reproducir la violencia en carne propia, porque no se les da acceso a la educación, y esa falta de educación se convierte en no conseguir trabajo, en no recibir ESI que les ayude a elegir cuando empezar y dejar de parir, y en un largo etcétera de carencias. Pareciera que si tenés siete hijos con menos de treinta mil pesos tenés (tienen) que vivir, porque cobrar el IFE sería pedir demasiado.

LA COMUNIDAD ORGANIZADA COMO PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE EL ESTADO Y LOS BARRIOS

Por Rocío Reta y Brenda Belén Castillo

Juan es trabajador de la economía popular: carpintero, vive en Villa Allende al norte del Gran Córdoba. Antes de decretarse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), participaba de la vida barrial con sus vecinos, colaboraba en un comedor popular, asistía a talleres culturales, deportivos, de oficios, recreativos y a clases de apoyo para terminar el primario para adultos. En el marco de una población diversa, una militancia territorial que prometía a futuro una sólida mesa de trabajo barrial.

Desde la perspectiva de Juan la crisis profundizada a partir del 2015, sumado al contexto de emergencia sanitaria, acentuó el trabajo territorial. Esto llevó a que los límites de cooperación se extendieran a barrios aledaños en los que abundaba el trabajo precarizado, la desigualdad estructural de viviendas, el analfabetismo y un escaso acceso a la información/tecnología.

La pandemia puso en jaque el desarrollo de todas las actividades socio-comunitarias. Una vez restringida la circulación, fue difícil continuar con el trabajo cooperativo. Aún así, como vecinos solidarios decidieron sostener la entrega de módulos alimentarios completos que garantizaran la calidad nutricional necesaria en las familias. Muchas actividades se realizaron con dinero del bolsillo de Juan y a través de donaciones que tuvieron como escenario de recepción su casa. En los primeros meses de pandemia el panorama era desolador, la ayuda estatal amortiguaba la situación familiar, pero la carencia de acceso a información y recursos limitaba a aquellos que podían ser beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por falta de documentación, por no encontrarse bancarizados o no contar con dispositivos informáticos.

Juan, a pulmón y corazón, ayudó a estas mismas familias a tramitar el IFE. Hubo dificultades a la hora de inscribirlas, al momento del cobro, pues no sabían cómo, ni tampoco estaban integradas a un sistema bancario de ningún tipo. Además, evidenció la escasa respuesta del Estado al momento de resolver inconvenientes: en casi ningún momento se acercó alguna funcionaria a consultar cómo estaba la situación de cada una de las aspirantes al Ingreso.

Este caso visibiliza a la organización en red, como aquella capaz de vencer los obstáculos individuales y de enajenación con los que se desenvuelve el avance de la globalización y el neoliberalismo posmoderno. Por su parte, la red de acompañamiento a los vecinos pretende revertir el "status quo" de la desigualdad en el ámbito familiar privado y trasladarlo a la discusión en el espacio público.

Concluimos con la certeza de la importancia de los mediadores entre el Estado y la sociedad, como Juan. Es preciso evidenciar no sólo su reconocimiento retributivo económico y su carácter esencial como actores territoriales sino también nuevos desafíos para la ampliación de derechos: demanda protección para garantizar herramientas imprescindibles en función de las intervenciones (más allá de su propio marco de militancia histórica en el barrio), el rol de promotores que brindan capacitación y transferencia de habilidades a las diversas comunidades formando redes de solidaridad punto de encuentro entre el Estado y los barrios, entre otros.

NODO LA PAMPA

POLÍTICA SOCIAL Y TAREAS DE CUIDADO

Por Daiana Caliva Gómez

Angélica tiene 34 años, es oriunda de General Pico y estudia Abogacía. También es mamá de una niña de 7 años y con su pareja viven en Santa Rosa, la capital de La Pampa. Ella forma parte de la población receptora de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y es una de las millones de mujeres que durante 2020 recibieron el IFE de manera automática y sin mediadores.

Angélica volvía a Santa Rosa con su hija en 2017 luego de una larga estadía en General Pico y en 2018 fue despedida de la heladería en la que trabajaba. A partir de allí, retomó sus estudios universitarios en la UNLPam y comenzó a percibir la AUH de manera inmediata. También tuvo acceso a la Tarjeta Alimentar: “Cuando yo estaba en blanco no tenía asignación, tenía un salario que te pagaban aparte. A partir de que yo me registré como que ya no trabajo más en relación de dependencia, automáticamente me dieron la Asignación Universal”, cuenta.

El pasado fue un año particular en la vida de todas las personas. Cuando en marzo empezó el ASPO, ella y su pareja, también estudiante universitario, estaban desempleadas y utilizaban la beca de comida y de ayuda económica otorgadas por la UNLPam para alimentarse. Vivían en un departamento contiguo a la casa de su suegra, por lo que no tenían gastos de alquiler.

Angélica tuvo conocimiento del IFE a través de las redes sociales. Como era beneficiaria de la AUH, no tuvo ningún inconveniente para acceder a la nueva política social. “A diferencia de aquellos/as que lo pedían y no tenían hijos”, según sus palabras. Angélica usó el dinero del IFE para saldar una deuda contraída con la escuela privada a la que su hija concurrió hasta mediados de 2019: “Ella estaba en un colegio privado al que había ido porque justo le tocó una beca, pero la beca a mitad de año se cortó y no dio para cambiarla a otra escuela o a otro jardincito. Entonces se me generó una deuda bastante importante”, destaca.

Aunque agradece el IFE, Angélica recuerda que vivió con confusión el momento en el que se iban a realizar los pagos: “Ay sí, lo estaba esperando porque toda esa plata la tenía destinada más que nada a pagar cuentas, que, si bien se habían cortado todos los plazos, no corrían intereses, después había que pagar igual, entonces quería sacarme cuentas de encima, sobre todo la cuenta del colegio de la nena y era lo más importante viste”. Las palabras de Angélica dejan al descubierto la preocupación por las deudas acumuladas, la lucha contra los intereses e, incluso, la importancia de la educación en su visión, dado que, con la primera y segunda ronda del IFE, logró cancelar la deuda educativa y también comprar zapatillas para ella y su hija.

Su pareja es docente, y aunque aún no había terminado el Profesorado en Física, tener el 75% de las materias aprobadas le permitió conseguir horas de trabajo a mediados del 2020. Ella, por su parte, logró adquirir una pasantía en el mismo momento y aunque tuvo miedo de contagiarse del virus, asumió los riesgos a cambio del dinero que necesitaba para poder sobrevivir.

Antes de que esto ocurriera, Angélica y su pareja desplegaron distintas estrategias de supervivencia económica. Por ejemplo, suspendieron el pago de los servicios de Internet y telefonía: “Pagábamos la luz solamente porque era la más abultada, pero después lo que es Claro e Internet, lo pagamos recién en agosto cuando ya cobramos nuestro primer sueldo los dos”. El otro asunto importante que tuvieron que resolver fue conseguir y administrar la comida del mejor modo posible. Además de acompañar a su hija en las tareas escolares, Angélica era la encargada de planificar las comidas del hogar, así que buscaba una carnicería con precios accesibles y con la Tarjeta Alimentar se encargaba de comprar la carne.

La familia cambió sus consumos alimentarios durante los inicios y el transcurso de la pandemia. Por las restricciones económicas y el desempleo, los ingresos y gastos del hogar se tornaron inciertos. Angélica relata que, de marzo a julio, atravesaron los momentos más duros: “Para no comer arroz otra vez, directamente tomábamos mate con pan. Una vez me pasó que mi hija me pedía leche y no tenía cómo comprarle y eso fue muy feo”. El consumo de leche y la compra de agua envasada fueron bienes de los que debieron privarse o, al menos, abstenerse transitoriamente. Comer un asado el fin de semana se alejó más y más del imaginario: “Mi hija extrañaba muchísimo la fruta, ella es mucho de la fruta, extrañaba muchísimo lo que es fruta y bueno y mi marido y yo la carne [Risas]. Extrañábamos un montón la carne, y ahora medio que te cansa comer tantos días arroz, fideos... Te cansa bastante”, menciona.

Al percibir la beca del comedor universitario, la pareja recibía una bolsa de mercadería que dejaban sanitizada en la puerta del hogar y que les permitía no pasar hambre pese a que tampoco alcanzaba para todo el mes: “Venía también lavandina, por ahí detergente. Venía papel higiénico, jabón, jabón venía siempre, después aceite, vinagre, fideos siempre, arroz siempre, yerba, dos veces nos mandaron durante el año pasado un pedazo de carne, después siempre era pollo, medio pollo. La bolsa de mercadería nos la mandaban una vez por mes, pero la terminabas en dos semanas”.

Si bien con el pasar de los meses pudieron retornar a sus consumos alimentarios, Angélica asegura que tiene la sensación de que el dinero no alcanza. “Todo el tiempo te quedas sin plata” o “estás gastando de más”, dice, mientras anhela poder llevar a su hija a tomar un helado o comprarle ropa.

Aunque se benefició con los meses de gracia y el cese de los intereses bancarios, Angélica cree que si no hubiese contado con el IFE se hubiera endeudado aún más. En sus palabras, fue un “salvavidas”.

“No sabía cómo pagar esa cuenta, te juro. Digo: “No”, encima es la escuela, o sea, no tengo... o sea, apenas llego a comer, apenas llego a pagar la luz, no tengo como pagar esa cuenta y es una institución privada, los intereses te comían vivo, te juro que fue un salvavidas, digo: “Ay, liquidado esa cuenta y ya respiro”.

Lo mejor que tuvo el IFE, menciona Angélica, fue su alcance: “Yo creo que, así como a mí, a mucha gente le ha servido como un salvavidas para pagar sus cuentas, pero yo he visto otros casos, por ejemplo, en donde les permitió a muchas personas emprender. Yo conozco gente de Santa Rosa que ha comprado verduras y ha salido por las casas a vender, o se han comprado carne y se han hecho un emprendimiento de milanesas con el IFE” Y resaltó la ayuda del estado: “hay gente que la sufrió, se sufrió mucho en la pandemia realmente, gente que no tenía para comer y hay ciertas necesidades donde el estado tiene que estar...”

Vemos así, que la experiencia de vida de Angélica y su familia durante el 2020 tuvo tres grandes momentos, la peor parte fueron los primeros meses, dado que ambos estaban desempleados. Allí tuvieron que suspender el pago de servicios y reordenar sus consumos alimentarios. En esta etapa, el IFE ocupó un lugar protagónico en saldar la deuda educativa de su hija. Luego, a mitad de año, con la pasantía de ella y el trabajo como docente de su pareja pudieron revertir la situación económica de la familia y saldar las deudas pendientes. En la actualidad, él consiguió otro trabajo y ya recibido como docente pudo titularizar horas, lo que le permite a Angélica dedicarse con mayor énfasis y tiempo a estudiar y capacitarse, con el objetivo de poder recibirse de Abogada este año.

NODO MENDOZA

MIGRANTES, LA CARA OCULTA(DA) DEL IFE

Por Juliana Vilchez Pereira

Ana tiene 49 años y vive junto a su hija menor y su marido en un asentamiento informal habitado por la colectividad de inmigrantes peruanos en Mendoza. Es un lugar inmiscuido entre los barrios más paquetos de Chacras de Coria, con calles y casas precarias, conexiones irregulares a los servicios básicos, a un costado de la Ruta Panamericana.

Oriunda de Perú, Ana llegó a la provincia en 1971. “Vine a los 23 años, o sea que te puedes imaginar que tengo casi toda una vida aquí”, comenta. Al principio estuvo sola, pero luego convenció a otras mujeres de su familia para que la siguieran. Cuenta que migró en busca de oportunidades laborales y Mendoza era, en aquel momento, un destino muy conocido para sus compatriotas.

“Trabajé primero en una casa como empleada doméstica con cama dentro. Estuve nueve años allí, pero después me independicé y trabajaba por horas en distintas viviendas”, relató. Así fue, dice, hasta que “gracias a Dios” conseguí mi familia. Ana, resignada, cuenta que aún sigue trabajando en tareas de limpieza porque “no se consigue trabajo en otra cosa”.

Antes de la pandemia del Covid-19, trabajaba “en negro” en dos casas situadas en barrios privados, en las que realizaba tareas por hora de aseo, comida y cuidado de niñas/os. En medio de la emergencia sanitaria, fue despedida, las medidas impuestas no permitían entrar a pie al barrio, debía hacerlo en taxi o Uber. Esto generaba gastos que no fueron solventados por sus patronas que jamás la registraron formalmente, desvinculándola impunemente de la relación laboral.

Sin embargo, estar sin trabajo en un momento incierto como el provocado por la pandemia no la paralizó. Ana sostuvo la economía familiar vendiendo comidas típicas peruanas desde su casa. No fue sencillo por los controles. Trabajó en la clandestinidad, con temor a enfermar o ser sancionada. “Me quedé sin nada, así que lo único en que pensaba era en vender mi comida, pero a puertas cerradas. Solo lo publicaba en el grupo que tenemos acá de vecinos y, bueno, gracias a Dios vendía y con eso, me sostenía”, destaca. Esta actividad fue su único ingreso, entre marzo y noviembre del 2020; con él sostuvo la economía del hogar y ayudó económicamente a su madre, a quien tiene a su cargo.

Ana explica que su experiencia en el acceso a las políticas sociales no fue buena. “Cuando me operaron de un cáncer en 2012, me dieron un papel en el hospital para que me otorgaran una ayuda, pero la municipalidad de Luján me lo rechazó por ser extranjera y no lo pude hacer”. Pedir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no fue la excepción. Aun contando con los años de residencia permanente fijados en la norma y siendo beneficiaria directa del IFE, Ana tuvo que escuchar que no le correspondía. Fue su hija mayor quien insistió y logró que fuera tomada en cuenta.

Al final, Ana cuenta que fue al banco con poca expectativa. No creía que fuera verdad y pudiera cobrar el dinero del IFE, que llegó cuando más lo necesitaba, en el momento justo. Con el Ingreso, pagó los medicamentos, compró ropa para su hija menor y puso fin a algunas deudas.

Con 27 años de residencia permanente en el país, Ana continúa sin la certeza de saber si podrá acceder a otras políticas sociales siendo “extranjera”. Haber accedido en esta ocasión, fue según Ana, una “bendición”.

NODO SANTA FE

GESTIÓN DE ADVERSIDADES EN UN CONTEXTO DE PANDEMIA. CRITERIOS Y CURSOS DE ACCIÓN EN DISPUTA

Por **Mateo Musuruana**

Florencia tiene 28 años y vive en la ciudad de Santa Fe con su hija, de 4 años. Desde 2018 trabaja en una empresa internacional que ofrece servicios de venta a otras compañías. Ella vende seguros en una financiera, pero depende contractualmente de la empresa tercerizada. A su vez, tiene un emprendimiento de venta de ropa y trabaja tres días a la semana en el instituto educativo de su hermana, “ayudando” a la secretaria. Su condición laboral articula lo formal y lo informal, lo estable y lo flexible.

Ni bien se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), la financiera cerró hasta finales de abril. Luego, en mayo, comenzó a trabajar remotamente y se reincorporó en julio, alternando entre presencialidad y virtualidad cada 15 días. En este nuevo contexto, se separó de su novio y buscó un departamento para alquilar, afrontando sola la crianza de su hija y los gastos del hogar individualmente. Sus ahorros se esfumaron, pero pudo sostenerse. Florencia aprovechó la situación de aislamiento para incrementar sus ventas, debido a que las personas estaban más predispuestas a conversar. Así pues, se mostraba orgullosa de su capacidad de adaptación para sortear, por cuenta propia, los obstáculos impuestos por la pandemia.

Con respecto al ATP, la empresa internacional solicitó el beneficio y ella pudo cobrarlo durante 6 meses, el cual cubrió el 50% de su salario. Ahora bien, la restricción a la compra de dólares impuesta por el Gobierno como parte de la medida para quienes lo recibieron, no le cayó nada bien “Es imposible, no tenés manera de ahorrar”. Además, sostiene que su empleadora no necesitaba la asistencia estatal porque “empresas que se dedican a esto nunca pierden”.

De todos modos, justifica el accionar de los que “usufructúan” un beneficio que deberían recibir otros. Explica, convencida, que este país ofrece posibilidades no a quienes las necesitan, sino a aquellos que mayores ventajas tienen. Así, quienes detentan posiciones de privilegio pueden actuar por inercia, casi mecánicamente, cuando de “sacar ventaja” u obtener beneficios se trata. Esto los exculpa y, por ende, su juicio moral recae sobre aquellos que “dan posibilidades”. A su vez, su crítica se apoya en un esquema de valores que prioriza la maximización de los recursos y la autosuficiencia; es decir, si ella pudo hacerle frente a una situación adversa sin reclamar ni recibir ayuda de terceros ¿cómo es posible que ciertos actores, con amplia capacidad de autogestión, soliciten y reciban la ayuda del estado?

En este sentido, piensa que si bien la política de ATP fue “salvadora” para algunas empresas, más que nada contribuyó a reproducir un juego injusto de cooptación de recursos y distribución de beneficios. Un juego donde ganan las grandes empresas y ella pierde: El ATP no significó una garantía o mejora para sus ingresos, solo una limitación a su capacidad de ahorro.

NODO TUCUMÁN

SOSTENER LA EDUCACIÓN DESDE CASA: UNA TAREA POSIBLE

Por Solange Abigail Robles y Andrea Carolina Morales Chocobar

Para Eugenia, dueña y directora de un colegio dedicado a la educación primaria especial, secundaria integral especial e integración escolar ambulatoria en la ciudad de San Miguel de Tucumán, las cosas nunca fueron fáciles; siempre hubo que remar cuesta arriba. La institución se sostiene con el pago derivado de las prestaciones de las obras sociales y las pensiones no contributivas de sus estudiantes. Nunca recibió subsidios estatales. De su funcionamiento dependen 60 trabajadores y trabajadoras que asumen las tareas de administración, mantenimiento, docencia y equipo técnico. Algunos se encuentran en relación de dependencia y otros, en calidad de contratados. Entre todos se encargan de hacer del IPADEP –así se llama la escuela- un espacio de aprendizaje, esperanza y solidaridad.

Eugenia nos recibe en su oficina, un cálido ambiente rodeado de plantas y con luz natural. El gato --la mascota del colegio-- se pasea inquieto, extrañando el ruido, las voces y las risas de los chicos y chicas que solían asistir hasta marzo del 2020 al IPADEP. Nos comenta que ya desde 2015 la institución atravesaba una situación deficitaria que le generaba angustias y dolores de cabeza. La preocupación siempre era la misma: cumplir en tiempo y forma con las obligaciones salariales de los trabajadores y poder seguir brindando educación a sus alumnos. Este complejo escenario se agudizó con la llegada de la pandemia en 2020, especialmente cuando en marzo el gobierno nacional decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y todas las instituciones educativas del país cerraron sus puertas.

En este contexto de dudas e incertidumbre, IPADEP comenzó a preparar a su equipo para afrontar un nuevo desafío: sostener la enseñanza y el aprendizaje desde cada hogar. Por las características particulares de la institución, su cierre no solamente significó la pérdida de la presencialidad, sino también de un importante espacio de sociabilidad e independencia que el colegio representa para chicos y chicas con discapacidad. La situación significaba un gran desafío pedagógico, al que se le sumaba la inquietud por los ingresos económicos.

La preocupación por acompañar y sostener la educación en estos duros tiempos fue siempre una constante para los miembros de IPADEP. Eugenia nos cuenta: “No se dejó de trabajar nunca porque había que llegar a los chicos a como diera lugar. Acompañarlos, estar, solucionar cuestiones particulares y atenderlos. Eso de que la docencia no trabajó no es real y no es nuestro caso. Acá se trabajó hasta en horarios que no correspondía hacerlo, en los que los papás estaban disponibles. Todo el equipo se hizo espacios para llegar a los chicos”, asegura. La creatividad y la imaginación fueron los motores principales para seguir trabajando desde los hogares. El escenario virtual no fue una barrera para llevar a cabo celebraciones, encuentros y actos patrios. El 25 de mayo, por ejemplo, decidieron enviar audios con chacareras para que los alumnos las bailaran junto a sus padres y enviaran por video. También organizaron proyectos de lectura. Todos estos esfuerzos fueron acompañados por psicólogas de la institución.

El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) fue una alternativa esperanzadora para este establecimiento que nunca antes había recibido ayuda del Estado. Cuando sus directivos se enteraron de la existencia de aquel sostén económico no dudaron en solicitarlo con la mediación del equipo contable. Sin embargo, la aprobación sufrió demoras, ya que los organismos de control se tomaron más tiempo para evaluar el caso de esta institución privada. Con una respuesta positiva y favorable, Eugenia concluye: “Necesitábamos dinero para hacer frente a los sueldos. Para nosotros, ha sido fundamental y de muchísima ayuda la ATP. Hubiera sido muy difícil poder responder en tiempo y forma con los salarios en caso de no haberlo recibido”.

Eugenia valora la existencia de esta política pública porque afirma: “Toda ayuda social en esencia es buena y realmente sirve para solventar a quienes no tienen espaldas en épocas de crisis como la del año pasado”.

IPADEP es una de las tantas instituciones a lo largo del país que lograron mantener un servicio tan sensible como la educación a niños y niñas con discapacidad, un desafío que supuso no solo adaptar los contenidos a la virtualidad, sino reformular sus estrategias económicas para contener y abrazar a su comunidad educativa.



Escuela IDAES
UNSAM